



SUMARIO

NOTIFICACIÓN DE DESTITUCIÓN DE LA CIUDADANA: MARIE JACQUELINE VILLAFANE DELGADO.

N° DP-OI/014.20

Mérida, 31 de enero de 2019.

Ciudadana:

MARIE JACQUELINE VILLAFANE DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.929.696, *Consultor de Información y Control de Estudio*, adscrita a la *Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes*, Mérida, estado Bolivariano de Mérida. **Dirección de habitación:** Carretera Trasandina, Sector San Benito de Escagüey, calle Alexander Quintero, casa S/N, municipio Rangel del estado Bolivariano de Mérida.

Me dirijo a usted con la finalidad de notificarle en cumplimiento al artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del contenido de la decisión del ciudadano: Mario Bonucci Rossini, en su condición de Rector de la Universidad de Los Andes, plasmada en Decreto Rectoral N° 0016/2020 de fecha veinticuatro (24) de enero de 2020, el cual se anexa a Boleta de Notificación para que forme parte integrante y constitutiva de la misma, mediante el cual se le **DESTITUYE** del cargo de *Consultor de Información y Control de Estudio*, Escala 4 / Nivel 6, cargo

de carrera cuyo ingreso a la institución consta desde fecha 05.04.2010, con dedicación a tiempo completo, adscrita a la *Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes*, de esta ciudad de Mérida, estado Bolivariano de Mérida. Tal decisión se origina por haber incurrido en las causales establecidas en el artículo 86 numerales 2° y 9° de la Ley del Estatuto de la Función Pública (ordenamiento jurídico acogido por la Universidad de Los Andes), que reza: “**Artículo 86:** Serán causales de destitución: (...).2. *El incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo o funciones encomendadas.* (...) 9. *Abandono injustificado al trabajo durante tres (03) días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos...*”, es decir, la funcionaria abandonó de manera injustificada su lugar de trabajo. Vista la documentación presentada al efecto, dio origen a que se abriera la investigación correspondiente, instruida y sustanciada por la Dirección de Personal como órgano competente por disposición del artículo 89 numeral 2° *ejusdem*, cuyas actuaciones fueron llevadas en el expediente administrativo disciplinario N° 010-2019. Se comprobó que abierta la correspondiente investigación disciplinaria por parte de la Dirección de Personal y una vez practicadas todas las diligencias y actuaciones correspondientes tendientes a clarificar los hechos que se denunciaron en su contra, se procedió a su notificación y se realizó la formulación de los cargos correspondiente, para que ejerciera su derecho a la defensa y al debido proceso. Que una vez concluida la fase de instrucción y sustanciación por parte del Órgano Instructor (la Dirección de Personal) conforme al íter procedimental

correspondiente y vencido el lapso de pruebas, se procedió a remitir el respectivo expediente administrativo disciplinario al Servicio Jurídico a fin de que opinara sobre la procedencia o no de la destitución conforme a lo establecido en el artículo 89 numeral 7° de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Que el Servicio Jurídico como unidad administrativa similar a la Consultoría Jurídica, instancia administrativa señalada por el artículo 89 numeral 7° de la Ley del Estatuto de la Función Pública, procedió a emitir la respectiva opinión jurídica sobre el expediente administrativo disciplinario N° **010-2019**, la cual, luego del análisis de las pruebas presentadas por el órgano instructor y en virtud de que la funcionaria investigada no presentó escrito de descargo como tampoco promovió ni evacuó pruebas, concluyó en lo siguiente “...**ES PROCEDENTE la medida disciplinaria de índole expulsiva de DESTITUCIÓN DE SU CARGO...**”. Considerándose que la opinión jurídica emitida por el Servicio Jurídico, observa que el órgano instructor obró conforme a derecho durante la sustanciación e instrucción del expediente N° **010-2019**, además que le garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso a la funcionaria, en razón de lo cual, el Despacho Rectoral acoge como propio y en su totalidad la referida opinión jurídica. En consecuencia, el Rector, como máxima autoridad y representante legal de la Universidad de Los Andes, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Universidades, basó su decisión en los elementos de convicción que llevaron a considerar que su actuación se encuentra enmarcada en las causales de destitución enunciadas en los numerales 2° y 9° del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En definitiva: el Prof. **MARIO BONUCCI ROSSINI**, en su condición de **RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES** y en uso de las atribuciones legales conferidas en el artículo 36 de la Ley de Universidades en concordancia con el artículo 89 numeral 8° de la Ley del Estatuto de la Función Pública. **DECRETÓ** lo siguiente: **ARTÍCULO 1°:** Se

DESTITUYE de la Universidad de Los Andes, del cargo de Consultor de Información y Control de Estudio, Escala 4 / Nivel 6, cargo de carrera cuyo ingreso a la institución consta desde fecha 05 de abril de 2010, con dedicación a tiempo completo, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, que hasta la presente fecha ejerce la ciudadana **MARIE JACQUELINE VILLAFÑE DELGADO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-9.929.696**, de este domicilio y civilmente hábil. **ARTÍCULO 2°:** Se autoriza suficientemente a la Dirección de Personal de esta Universidad para que proceda a notificar de la presente decisión a la ciudadana **MARIE JACQUELINE VILLAFÑE DELGADO**, ya identificada, siendo su dirección de habitación: Carretera Transandina, Sector San Benito de Escagüey, calle Alexander Quintero, casa S/N, municipio Rangel del estado Bolivariano de Mérida, indicándole expresamente que con el presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa, por lo que de considerar lesionados sus derechos subjetivos e intereses particulares, podrá contra la presente decisión, interponer ante el Tribunal Contencioso Administrativo de esta jurisdicción (Juzgado Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida), formal Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial mediante la respectiva Querrela Funcionarial conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dentro del lapso de tres (3) meses contados a partir desde el día en que sea notificado de la presente decisión o de su publicación, si fuere el caso, conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tal y como lo señalan los artículos 94 y 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. **ARTÍCULO 3°:** La presente destitución de la ciudadana **MARIE JACQUELINE VILLAFÑE DELGADO**, ya identificada, se hará efectiva a partir de la notificación a su interesada del presente Decreto Rectoral; debiendo prestar la

Declaración Jurada de Patrimonio a que se refiere la Ley Contra la Corrupción, y entregar la indumentaria y equipos que sean propiedad de la Universidad de Los Andes y que se encuentren bajo su custodia así como suscribir el acta de entrega correspondiente (si es el caso), ante la dependencia universitaria correspondiente. **ARTÍCULO 4°:** El Vicerrector Administrativo y la Directora de Personal cuidarán de la ejecución del presente Decreto Rectoral, igualmente, se ordena a la Dirección de Personal tramitar lo conducente al cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos de orden funcional generados a favor de dicho ciudadano, así como tramitar su respectivo pago, además de librar las demás notificaciones necesarias al efecto.

En Mérida, estado Bolivariano de Mérida, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

Licenciada María Cecilia Ramírez
Directora de Personal de la Universidad de
Los Andes